RESUMEN DE LA UNIDAD 2

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

En cada capítulo de la unidad se partió de una serie de premisas y que luego de las contribuciones en los foros fueron ratificadas y también podemos incorporar otras.

Capítulo 1. El marco legal de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia.

- En Bolivia la alimentación está reconocida como un derecho fundamental de la población.
- Existe un marco legal importante orientado al logro de la seguridad con soberanía alimentaria.
- El desafío está en lograr construir los instrumentos para su aplicación y que se traduzca en un mejoramiento de la situación de alimentación y nutrición de la población.

En este primer capítulo las contribuciones han ratificado las hipótesis planteadas al inicio, es decir que reconocemos que en el país existe un marco legal bastante amplio en relación a la seguridad y soberanía alimentaria, pero que sin embargo no están siendo traducidos en acciones prácticas (políticas públicas).

En relación a la coherencia entre el marco legal y las orientaciones de la Soberanía Alimentaria las opiniones están divididas. Algunos afirman que no existe coherencia entre las diferentes leyes promulgadas y entre las leyes y los aspectos más operativos, pero es evidente que los principios y las orientaciones de las leyes aprobadas rescatan de manera importante los planteamientos de la soberanía alimentaria, sin embargo hay aspectos que son contradictorios entre las leyes y los aspectos operativos de las mismas.

Esto se ve profundizado por la falta de reglamentación de las leyes aprobadas y de asignación de recursos para su implementación, lo que hace que las leyes no lleguen a toda la población.

Una cantidad importante de leyes, decretos, planes y programas intentan facilitar instrumentos para que la seguridad y soberanía alimentaria se construyan en lo regional y local, pero al mismo tiempo en el tema de autonomías no está definida muy claramente que responsabilidad tiene cada uno de estos niveles.

A partir de ello podemos plantear también:

- Existen contradicciones conceptuales entre las acciones prácticas impulsadas desde el gobierno central y principios de los marcos legales aprobados.
- No existe claridad sobre las competencias en los diferentes niveles de gobierno en relación de la seguridad y soberanía alimentaria.

Capítulo 2. Las políticas de seguridad y soberanía alimentaria.

- A partir de la aprobación de la CPE, el Estado ha pasado a tener una participación muy importante en la implementación de políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional.
- Todavía existe una fuerte visión de que la seguridad y la soberanía alimentaria está relacionada y se “resuelve” solamente con la producción de alimentos.
- La lógica de diseño e implementación de programas y proyectos de seguridad alimentaria no ha cambiado porque sigue siendo abordada de manera sectorial, dispersa, de corto plazo y no están orientados hacia objetivos estratégicos de SAN.
- Para el logro de objetivos estratégicos de SAN es fundamental coordinar acciones multisectoriales, con metas concretas, priorizando las poblaciones y los territorios más vulnerables.

Las cuatro premisas del capítulo 2 también fueron ratificadas con los aportes recibidos.

En general las políticas de seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia demuestran la voluntad de las autoridades nacionales de abordar la temática. Se ha dado mucha importancia a la agricultura familiar pero al mismo tiempo se toman decisiones que van en contra de ella, apoyando de manera más importante a la agroindustria; y tampoco hay la misma sensibilidad hacia la nutrición, por lo que las políticas de seguridad y soberanía alimentaria se quedan en los componentes de producción y disponibilidad de alimentos que oculta otros aspectos muy importantes como la atención primaria de la salud e, incluso, la pobreza extrema que afecta a los agricultores familiares. Siendo éste uno de los desafíos principales que existe, el de vincular la producción de alimentos con un buen estado nutricional de la población, y que no se los considere como dos aspectos separados, si logramos articularlos podemos decir que estamos avanzando hacia la seguridad y soberanía alimentaria.

Si bien se reconoce que el actual gobierno ha dado mayor importancia a la temática y está implementando diferentes programas y proyectos relacionados a la seguridad y soberanía alimentaria (EMAPA, Seguro Agrario, alimentación escolar, tierras, PROBOLIVIA entre otros), se ha planteado que existe una fuerte contradicción entre lo que conceptualmente se plantea como Soberanía Alimentaria y los aspectos prácticos. En las acciones mayormente se repiten las recetas del modelo neoliberal o de la cooperación internacional dando muestras que se está apoyando de manera más importante al modelo agroindustrial y que los agricultores familiares campesinos indígena originarios reciben el mismo “paquete” (semillas, insumos químicos) sin considerar las importantes diferencias que existen entre ambos sistemas de producción.

La cumbre “sembrando Bolivia” ha puesto en evidencia estas contradicciones entre el discurso político, el marco legal aprobado (incluyendo la CPE) y las orientación de las acciones prácticas del gobierno de Evo Morales. La Cumbre ha “simplificado” todo el abordaje y construcción de la Soberanía Alimentaria solamente desde la perspectiva de la producción de alimentos, siendo un

punto central de todo el debate el de las semillas, no se hace ningún análisis sobre las consecuencias sociales del uso de transgénicos. En la propuesta tampoco no se habla de agricultura familiar campesina indígena originaria, ni siquiera y de un sistema de producción, ahora la política estaría atomizada por rubros en los cuales hay que alcanzar metas.

A partir de este análisis también resalta como importante, la necesidad de plantear políticas diferenciadas para la agricultura familiar y para la agroindustria porque son dos modelos de producción distintos.

Por otro lado se ha reconocido que existen tecnologías validadas en la práctica para el fortalecimiento de la agricultura familiar que pueden ser adoptadas por los programas de gobierno.

Es también importante contar con una instancia de coordinación multisectorial para una planificación más estratégica, se evalúen los resultados alcanzados y contrastarlos por ejemplo con el verdadero rol que están cumpliendo las organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres y también de la inversión realizada. Otras sugerencias son la de regionalizar las políticas de producción para que éstas estén más adecuadas a cada contexto y el de trabajar en el mejoramiento de los hábitos de consumo.

En el foro final se plantearon fortalezas y debilidades de las políticas públicas de seguridad y soberanía alimentaria, que además de ratificar la existencia de un marco legal muy importante, en otros aspectos destacan varias falencias que se resumen a continuación:

En relación a los recursos económicos destinados a éstas políticas, por un lado se reconoce que a nivel macro existe una estabilidad, pero que la asignación de presupuestos es todavía insuficiente, principalmente en los municipios más pequeños.

Se considera que otra de las debilidades importantes es la falta de una institucionalidad consolidada tanto técnica como económicamente, lo que no permite, entre muchos aspectos, la implementación amplia de las acciones y menos medir los avances al no contar con indicadores ni un sistema de información.

El último punto sobre el control social necesario para la implementación de las políticas se ha reconocido que éste es inexistente o muy débil en la mayoría de los municipios.

A partir de las contribuciones al foro podemos plantear dos nuevas premisas:

- Existen fuertes contradicciones entre las acciones que se impulsan desde el gobierno con los principios de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación.
- La implementación de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria deben considerar la participación de la población desde su planificación, implementación y evaluación.

- Es necesario establecer una instancia de coordinación multisectorial de la seguridad y soberanía alimentaria para fortalecer la institucionalidad de las diferentes instancias existentes y promover el control social.

Capítulo 3. La alimentación complementaria escolar.

- Sin lugar a dudas la principal “política” de seguridad alimentaria que los municipios asumieron y están implementando.
- Es una “política” totalmente descentralizada porque son los gobiernos municipales los que asignan recursos de su presupuesto.
- En la ACE se evidencia de manera más clara la necesidad de coordinación de acciones multisectoriales que van desde la producción de alimentos al mejoramiento del estado nutricional.

Finalmente en el último capítulo sobre la alimentación complementaria escolar, las premisas planteadas también fueron reconocidas por los participantes del curso a partir de las contribuciones.

Las sugerencias para la implementación del PNACE estaban principalmente orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar para que la alimentación escolar en cada municipio sea con productos locales, lo que muestra que todavía se debe trabajar en profundizar en una planificación más multisectorial.

La nueva premisa que podemos incorporar es:

- La implementación del PNACE se la debe realizar a partir de la realidad y contexto de cada uno de los municipios del país.